

Tercera Sesión

NUEVAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO: EL PAPEL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA

El 29 de abril la Fundación Carolina celebró un webinar de la serie convocada para analizar el impacto de la COVID-19 dedicado al papel de la educación superior, la ciencia y la tecnología ante dicha pandemia. Participaron Isabel Álvarez, directora del Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI); Francesc Pedró, director del Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (IESLAC-UNESCO); Josette Altmann, secretaria general de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO); y Pablo Gentili, secretario de Educación del gobierno de Argentina. La sesión estuvo moderada por el director de la Fundación Carolina, José Antonio Sanahuja.

Conectar la agenda de la innovación con la agenda social

En su intervención inicial, Isabel Álvarez apuntó que la pandemia de la COVID-19 ha llegado en un momento en el que la ciencia, la tecnología y la innovación (CTI), se ha incorporado finalmente a las políticas de cooperación, por medio de la Agenda 2030 y, en concreto, del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 9. Esto ha supuesto un reconocimiento expreso al papel de la CTI como factor clave para mejorar la calidad de vida, la protección social y la sostenibilidad global. No obstante, este vínculo cobra en América Latina características diferenciales, en ocasiones inquietantes.

En primer lugar, los recursos y capacidades con los que se cuenta en la región son aún muy escasos, con independencia de la heterogeneidad entre sus países. Y hay que resaltar que el problema no se reduce a carencias de inversión. Es igualmente necesario construir capacidades, es decir, desarrollar complementariedades institucionales que, de momento, son muy frágiles. En este aspecto se revelan debilidades estructurales, como refleja la desigualdad hacia la digitalización, que urge corregir mediante políticas de innovación inclusiva.

En segundo lugar, las prioridades en CTI han estado ante todo ligadas a metas de productividad, eficiencia y competitividad, pero menos a objetivos sociales y de desarrollo. Esta desconexión entre la agenda de la investigación y la social afecta al sector sanitario, donde la aportación de las ciencias sociales se ve relegada a un segundo plano. No obstante, como la COVID-19 ha puesto de manifiesto, resulta imperativo adoptar un enfoque interdisciplinar. Nos encontramos ante una crisis integral que no puede reducirse al terreno puramente epidemiológico, ya que atañe a la economía, a la cohesión social, y también tiene implicaciones ambientales. Por lo tanto, se hace preciso que el ángulo biomédico se complemente con criterios científico-sociales.



Resulta imperativo impulsar un enfoque interdisciplinar que conecte la agenda social con la agenda de la innovación

Por último, es asimismo necesario que, en un ejercicio de autocrítica, la comunidad científica ajuste sus sistemas de incentivos, de modo que se premie la aplicación práctica de la producción académica. Gran parte de las investigaciones no están dirigidas a la resolución de problemas sociales, puesto que esta orientación no puntúa para la promoción profesional. Quizá, sugirió Isabel Álvarez, el marco de los ODS podría convertirse en la referencia para actualizar los criterios de evaluación científica.

El tránsito hacia la formación virtual

Desplazando la reflexión sobre la docencia universitaria, Francesc Pedró aludió, preliminarmente, al escenario de abrupto tránsito hacia la formación virtual. Todos los centros han tenido que adaptarse a la educación online sin tiempo de preparación. Esto ha evidenciado los fuertes déficits que presenta la región, donde menos del 50% de los hogares tienen equipamientos informáticos adecuados y conexión a internet, lo que genera una gran desigualdad y favorece a los estratos sociales con mayores ingresos que viven en entornos urbanos.

Estas dificultades se extienden al profesorado, el cual ha tenido que reciclarse a un formato de enseñanza para el cual no estaba formado. Tal experimentación, que ha tomado el nombre de “corona-teaching”, habrá de ir depurándose hacia formas perfeccionadas de educación virtual, donde se cuida la programación de las actividades, la calidad de los contenidos, la tutorización, o los métodos de

seguimiento y evaluación. Pero este proceso dependerá del grado de generalización que adquiera la formación online, algo sobre lo que es prematuro adelantar conclusiones. Deberá reexaminarse cuál es el valor añadido de asistir a clases presenciales, analizar el rendimiento del docente como teletrabajador/a y ponderar los resultados de la enseñanza y el aprendizaje telemáticos. Con todo, es previsible que, al menos en el corto plazo, no se retorne a escenarios con aulas masificadas, y se establezcan esquemas de semi-presencialidad.



Del “corona-teaching” se pasará a formatos virtuales que cuiden la programación, los contenidos, el seguimiento y la evaluación

La cooperación educativa en el ámbito regional

Pedró advirtió asimismo que el impacto de la pandemia puede limitar el desarrollo del espacio iberoamericano del conocimiento, toda vez que en gran parte estaba articulado sobre la movilidad académica. Ya antes de la crisis la situación no era óptima puesto que dos tercios del alumnado que estudiaba en el extranjero, prefería desplazarse a Europa o a Estados Unidos en lugar que a otro país de la región. La retórica del “espacio compartido” no terminaba de traducirse en políticas y mecanismos institucionales que estimularan la movilidad regional, aunque en los últimos años también ha influido un contexto de parálisis económica que ha mermado los recursos de las familias y de los organismos públicos.

Pues bien, de acuerdo con las estimaciones del IESLAC, tras la pandemia se prevé que la movilidad estudiantil se reduzca un 30%, ya sea por causas financieras, ya por razones de prevención sanitaria (*COVID-19 y educación superior. De los efectos inmediatos al día después. Análisis de impactos, respuestas políticas y recomendaciones*, 2020). Al mismo tiempo, muchas instituciones a nivel global van a adoptar su oferta académica a formatos online, al menos para el próximo curso. Ante este escenario, los centros de la región van a tener que atraer estudiantes sin contar con los recursos para rivalizar con, por ejemplo, las universidades estadounidenses. Ciertamente, hay casos de instituciones y de gobiernos locales con proyectos muy sofisticados de educación online. No obstante, América Latina carece de instrumentos de cooperación regional que ofrezcan programas concertados de intercambio académico virtual. Aun así, la novedad de la situación puede propiciar que, en un plazo relativamente breve, se

generan modelos de buenas prácticas aprovechables para replantear de forma detallada el porvenir del espacio iberoamericano del conocimiento.

Al hilo de la perspectiva regional, Josette Altmann recordó los obstáculos a los que viene enfrentándose en los últimos años todo proceso de integración, no solo educativo, sino también económico o político. Ello no ha sido óbice para que las instituciones con vocación regional, como FLACSO, hayan continuado estudiando propuestas de trabajo común. Así, la institución ha impulsado recientemente dos informes en materia de formación. Uno, elaborado junto con el banco de desarrollo CAF, tiene por objetivo diseñar una agenda regional en formación del profesorado, extrayendo las mejores prácticas identificados en América Latina (*Políticas exitosas de desarrollo profesional docente en América Latina y el Caribe*, 2019). El otro, en preparación, analiza a escala regional el sistema de la educación secundaria, y los retos generales y de conectividad que afronta. Este aspecto guarda elementos de relación con la educación superior, puesto que como se indicó la brecha digital impacta ante todo en el contexto de los hogares, donde el acceso no llega a la mitad de la población.



Diseñar políticas informadas por la ciencia implica incrementar el diálogo entre las instancias decisoras y los centros que generan conocimiento

Por lo demás, agregó Altmann la gran mayoría de las instituciones se encuentran en la obligación de reformular su programación académica tanto como de capacitar a su cuerpo docente, con el fin de dar el salto a una nueva realidad aún por definir, pero que debe pasar por una colaboración más intensa entre universidades y gobiernos locales y nacionales, además de por una mayor cooperación regional. Diseñar políticas públicas informadas por la ciencia implica acrecentar el diálogo, la confianza y la colaboración entre las instancias de decisión política y los centros que generan conocimiento experto.

La relevancia del sector público

Pablo Gentili se detuvo en las respuestas educativas desde la acción gubernamental. En su caso, Argentina adoptó muy pronto una política enérgica de confinamiento para aplanar la curva, que comportó el paso inmediato del sistema educativo a la formación virtual. Se activó así una estrategia de emergencia en cuyo tránsito se ha hecho uso no solo de la red, sino también de la televisión

pública, a fin de soslayar la brecha digital. Ahora bien, tras estas medidas, se hace preciso pensar cómo se van a gestionar los problemas adicionales, ante todo de desigualdad, que apareja la crisis. En términos educativos, esta va a perjudicar a los grupos económicamente más vulnerables, pero también va a incrementar la desigualdad de género, puesto que las mujeres son las que, mayoritariamente, van a hacerse cargo del trabajo de los cuidados. Además, esto afectará a todos los grupos de edad, de ahí que el previsible aumento del abandono escolar será más acusado en el caso de las niñas.

A ello se unirá probablemente un descenso de estudiantes universitarios, tras el incremento registrado en la última década, producto del auge de las clases medias, con un gran porcentaje de alumnos/as que representaban la primera generación de sus familias que accedían a la formación superior. Se trata de un grave riesgo, habida cuenta de que la educación es el mejor mecanismo de movilidad social y contribuye a garantizar la igualdad de oportunidades, tanto más en sociedades tan segmentadas como las latinoamericanas. Desatender al sector conlleva además efectos económicos negativos, puesto que posteriormente se desemboca en estructuras laborales menos productivas.

La cuestión que entonces se suscita es la del papel que pueda cumplir el sector público. Ante los retos sanitarios, se ha hecho evidente la importancia del Estado como agente social; sin embargo, no está claro que esto vaya a replicarse en el ámbito educativo. Es más, la urgencia de la modernización tecnológica puede desencadenar un proceso de privatización, que comporta una doble amenaza. En primer lugar, dado que en los países de la región no hay plataformas digitales públicas, el empleo de estos soportes será de pago. El segundo problema radica en el control de la información y el conocimiento. Si la gestión se pone en manos de plataformas privadas, estas tendrán acceso a todo el flujo de datos del sistema, tanto en lo relativo a los intercambios entre el cuerpo docente y el alumnado como a los propios contenidos académicos. Este proceso, en última instancia, alienta una privatización de la ciencia opuesta al acceso abierto al conocimiento.



Hay riesgos de que la modernización tecnológica desencadene procesos de privatización del conocimiento

Ciencia abierta y modelo social

El debate final abundó en los riesgos de la privatización del conocimiento, muy patentes en un momento de crisis global. Si no se parte de una noción del conocimiento como bien público y, por ende, no se comparten metodologías, resultados o bases de datos bajo una gestión conjunta, el combate contra la pandemia no podrá resolverse. Esto, como recordó José Antonio Sanahuja, enlaza con la demanda de reconocer a la ciencia como un derecho humano, un compromiso que se adoptó en 2018 en la Cumbre Iberoamericana de Antigua, y que está abriéndose paso en Naciones Unidas. Por su parte, señaló Pedró, en aras de proteger la ciencia abierta, la propuesta de la UNESCO consiste en asegurar que toda aquella investigación financiada con fondos públicos sea publicada en contextos de plataformas abiertas.



El conocimiento abierto enlaza con la demanda de que la ciencia sea reconocida como un derecho humano

En el mundo post-pandemia van a reabrirse debates en los que será preciso vindicar el espacio público, la cultura democrática y la narrativa de un progreso universal, defendiendo los aportes de la ciencia y la tecnología en la reconstrucción del modelo de sociedad. El impacto de la crisis va a reconfigurar los sistemas educativos y, en este sentido, la participación y la deliberación ciudadana es fundamental puesto que el debate no puede quedar monopolizado por los gobiernos ni por las corporaciones tecnológicas. En la disputa por el conocimiento se reordenarán las prioridades y quizá, para la región, se abrirá una oportunidad para desligarse del “colonialismo académico” y apostar por una redefinición del conocimiento útil, donde las humanidades y la innovación social recuperen el terreno perdido frente a la instrumentalización científica.

Relatoría redactada por José Andres Fernández Leost



Video de la sesión

<https://www.youtube.com/watch?v=OE6lyYh7D9E>